Gobierno del CHACO

CG

DICTAMEN N° 308

REF: E2-2024-5241-AE S/RECURSO REVOCATORIA AGTE. BRONDI GONZALO M. C/DTO. N° 235/2024.-----

De: Asesoría General de Gobierno

Provincia del Chaco

Secretaria Letrada

Dra. Maria Fernanda Kniaz

A LA DIRECCIÓN DE CONTRALOR Y NORMATIZACIÓN

SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

PROF. RAMONA BEATRIZ RODRIGUEZ

PROVINCIA DEL CHACO

SU DESPACHO

De mi consideración:

Ingresa este organismo asesor la actuación de referencia a efectos de emitir dictamen, en relación al recurso de revocatoria, en los términos del art. 91° de la ley N° 179-179-A, contra el decreto provincial N° 235/2024 de fecha 28/02/2024 obrante en la e-parte 1, presentado en fecha 11/03/2024, por el sr. Gonzalo Matias Brondi, DNI 31.229.955, (incluido entre los instrumentos sujetos a revisión previstos en el decreto N° 13/2023).

Con carácter previo a la consideración del planteo recursivo impetrado, corresponde reseñar que dada la excusación planteada por la Sra. Asesora General de Gobierno- Dra. María Alejandra Ferreyra, conforme decreto Nº 664/2024, se analizará el planteo recursivo y emitirá el pertinente dictamen legal a través de la Secretaría Letrada de la Asesoría General de Gobierno, expresamente autorizada para dicho cometido, a fin de garantizar la trasparencia y equidad en la decisión a adoptar.

I. Ahora bien, efectuada la aclaración precedente, corresponde expedirme en relación a la admisibilidad formal del recurso incoado: En este punto examinados los antecedentes del caso, surge que el remedio recursivo fue articulado en tiempo y forma oportuna, motivo por el cual a continuación me abocaré a considerar la cuestión de fondo planteada.

a) Antecedentes: El recurrente inicia su pretensión recursiva efectuado un detalle de los antecedentes que motivaron el dictado de los decretos que motivan su presentación, números 13/2023, 3655/2023 y 235/2024.

El decreto cuestionado, en su art. 1°, expresa: *"Déjase sin efecto el Decreto N° 3655/23, en los términos de los artículos 127° y 128° de la ley N° 179-A, Código de Procedimientos Administrativos, por los motivos expuestos en los Considerandos del presente instrumento legal, y en un todo de acuerdo con el Dictamen N° 19/24 de la Comisión Revisora, creada por Decreto N° 13/23".*

Por su parte, el decreto N° 3655/2023 –e-partes 9- de fecha 07/12/2023, en su art. 1°, reza: *"Promuévase, a partir de la fecha del presente decreto, a los agentes detallados en Planilla Anexa, que forma parte integrante del presente Decreto, en el cargo de Director -Categoría 3 -Personal Administrativo y Técnico Apartado b) -Grupo 1 CEIC 1041 00, Director- Categoría 3- Personal Administrativo y Técnico Apartado a)- Grupo 2- CEIC que y Director General- Categoría 3- Personal Administrativo y Técnico Apartado a)- Grupo 1 CEIC que corresponda, en las oficinas allí consignadas, de conformidad con los fundamentos del presente";* y en su art. *2°: "Déjanse sin efecto, a partir de la fecha del presente Decreto, en los casos que correspondan, las designaciones en forma provisoria y subrogante de los agentes promovidos por el presente instrumento, atento la medida establecida en el Artículo 1° y de acuerdo con los fundamentos expuestos en los Considerandos del presente".*

En las e-partes 4/10 obran antecedentes administrativos del agente Brondi.

En e-parte 35 obra dictamen N° 15/2024 de Fiscalía de Estado.

En la e-parte 39 obra dictamen N° 19/2024 de la Comisión Revisora.

En la e-parte 40 se agrega nota de la Dirección Control Liquidación de Haberes de la Dirección General de Recursos Humanos, que informa, respecto al decreto N° 3655/2023, tramitado por actuación electrónica N° E4-2023-10711-Ae, que esa dependencia no tomó intervención, que por tal motivo se advierte en el Sistema de Liquidación de Haberes que no se realizó ninguna modificación en el Sistema de la Planta Orgánica Nominal (PON).

En la e-parte 41 se agrega informe de la Dirección Control Liquidación de Haberes de la Dirección General de Recursos Humanos, donde manifiestan que se advierte en el Sistema de Liquidación de Haberes que no se realizó ninguna modificación en el Sistema de la Planta Orgánica Nominal. (PON), que respecto a la remisión de los haberes de cada uno de los agentes mencionados en el Decreto N° 3655/23, correspondiente al periodo 12/2023 y 01/2024, se envió mediante correo electrónico oficial para prosecución del trámite que corresponda y en la e-parte

43, respecto a la actuación electrónica E2-2024-2692-Ae y a los agentes mencionados en el decreto N° 3655/2023, que en los meses de 12/2023 y 1/2024, no se visualiza modificaciones en el Sistema de Liquidación de Haberes respecto a los cargos.

En la e-parte 44 se agrega informe de la Dirección Control Liquidación de Haberes de la Dirección General de Recursos Humanos, donde manifiestan que los agentes mencionados en el decreto N° 3655/23 NO han percibido haberes correspondientes a los meses de 12/2023 y 1/2024 como titulares en los cargos, ya que se no se visualizan modificaciones en el Sistema de Liquidación de Haberes, respecto a los cargos.

En la e-parte 49 se corre vista de las actuaciones al recurrente y en la e-parte 50, el mismo contesta vista de las actuaciones.

b) Manifestaciones genéricas formuladas en el recurso. Refiere en primera instancia a que el decreto N°13/2023, suspendería los efectos de actos dictados por el Poder Ejecutivo que dispusieran creaciones de estructuras de cargos en diversas jurisdicciones entre las que, a su entender no incluiría la 14 a la que pertenece la misma.

Esta argumentación la realiza en forma general, sin mayores explicaciones y sustento o fundamento que justifique su interpretación personal respecto de la "exclusión" de los alcances del decreto N°13/2023 en relación a la jurisdicción 14, donde presta servicio el recurrente y por lo tanto que el decreto N° 3655/23 emanado del sr. Gobernador saliente, se encuentre exento de la suspensión de efectos y revisión dispuesta por el decreto Nº13/2023.

-Asimismo, expone que se vio imposibilitado de acceder a los antecedentes que sirvieron de sustento fáctico y jurídico al dictado del decreto impugnado, invocando que no obstante por Actuación Electrónica E2-2024-4692-Ae, *"...solicitamos, con otros agentes de la Jurisdicción, al Poder Ejecutivo Provincial, suspenda los plazos establecidos en el artículo 91 y nos conceda vista de las actuaciones electrónicas y dictamen de la Comisión Revisora, que motivaron el dictado del Decreto 280/24" y continúa diciendo "Que no siendo proveída nuestra presentación, nos encontramos desprovistos de la información necesaria para ejercer nuestro derecho de defensa conforme garantía constitucional, especialmente contra los argumentos que obrarían en el Dictamen 18/24 de la Comisión Revisora, que a las claras conforme con lo establecido en el art. 18 de la Constitución nacional "...Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales..."*.

Sobre este punto en particular se aclara que a *todos y cada uno de los agentes solicitantes y suscriptores de la actuación electrónica E2-2024-4692-Ae*, se les acordó VISTA de las actuaciones, es decir que a los mismos se

les ha garantizado el derecho al debido proceso, no obstante el cual, es falso que el aquí recurrente haya sido uno de los once (11) presentantes de la mencionada actuación, solicitando vista y suspensión.

Por último, y respecto al agravio esgrimido cuestionando la legalidad y/o legitimidad del decreto N° 13/23, debe tenerse presente, además de los fundamentos expuestos en este punto, el hecho real y concreto de que el Poder Judicial de la Provincia, *ha desestimado las acciones judiciales promovidas contra el mismo declarándolo legítimo, en la causa caratulada:* "Vandi Vanina c/Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco s/Acción de Amparo", Expte. N° 13.531/23", que se tramitó por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Resistencia, elevado luego en apelación a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial- Sala I, ello sin perjuicio de la extemporaneidad de cualquier impugnación al mismo en este tiempo e instancia y por lo tanto indiscutida.

-Detalla sus antecedentes laborales desde el año 2016, describe las funciones que desarrolla en el Instituto de Colonización desde el año 2021, hasta la promoción-titularización dispuesta por el Decreto N° 3655 y que fuera dejada sin efecto por el Decreto N° 235/24 objeto de la presente instancia recursiva.

c) Agravios concretos: Efectuado el detalle de los antecedentes en los términos del punto precedente, a continuación, referiré en forma concreta a cada uno de los agravios esgrimidos por el recurrente.

Expresa que el decreto N° 235/2024, lo agravia y discrimina en forma directa dado que dejó sin efecto su promoción al cargo que subroga hace más de 9 años y 9 meses.

Que el decreto N° 3655/2023 –de la gestión saliente- le fue notificado en fecha 07/12/2023 mediante STG y publicado en fecha 09/12/2023. Luego en fecha 11/12/2023 se dictó el decreto 13/2023 del actual gobernador que suspendió los efectos de todos los actos administrativos y creó la Comisión Revisora, con idénticos argumentos –entiende- que el decreto N° 39/2007 del ex –gobernador, salvo que el primero, suspendió los efectos de las notificaciones.

Dice que era de esperar que en los próximos días se dicte un instrumento reestableciendo los efectos de los actos no revocados, que de esa manera se volvió a vulnerar su derecho de defensa al no haberse publicado la totalidad de los actos emitidos y revisados, con el listado de los actos revocados y el dictamen de la Comisión creada al efecto. Que como consecuencia de la suspensión ordenada, no se produjeron las modificaciones de cargos para efectivizar lo dispuesto en el decreto N° 3655/2023.

Arguye que no tenía argumentos para recurrir el acto dado que no le generó ningún daño, ni contaba con fundamentos para atacar una suspensión que refería a actos administrativos emitidos por el Poder Ejecutivo por los cuales se dispusieron creaciones de estructuras de cargos, transferencias de personal, ingresos a planta permanente, promociones, bonificaciones y designaciones en cargos titulares entre el 18/09/2023 al 08/12/2023.

Expresa que en su entendimiento el decreto N° 13/2023 refiere a actos dictados por el Poder Ejecutivo (gestión 2019-2023) en las diversas jurisdicciones, NO en la jurisdicción 14 y que ninguna de esas situaciones se dio con los agentes promovidos por el decreto N° 3655/2013, publicado el 09/12/2023 -dice.

Continúa diciendo que el 05/03/2024, mediante actuación electrónica E2-2024-4692-Ae solicitó, con otros agentes de la jurisdicción 14, al Poder Ejecutivo Provincial que suspenda los plazos establecidos en el art. 91° del Código de Procedimientos Administrativos y que les conceda vista de las actuaciones electrónicas citadas en el Visto y dictamen 19/2024 de la Comisión Revisora, que motivaron el dictado del decreto N° 235/2024. Que no fue proveída su presentación y que por ello se encontraron desprovistos de la información y fundamentos necesarios para ejercer su derecho de defensa conforme garantía constitucional, especialmente contra los argumentos que obrarían en el dictamen 19/2024 de la Comisión Revisora, que a las claras confronta con lo establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional –entiende.

Que el decreto N° 235 al mencionar que no puede alegarse buena fe por parte de los agentes beneficiados por un acto irregular, pone en duda su buena fe. Expone sus antecedentes desde el año 2016, su pase a planta en la jurisdicción 14 en el año 2019 por decreto N° 448, de 14 años en la administración pública (contratado -Pase a Planta Permanente) y designación provisoria en el marco de la resolución N° 499/2021 del Instituto de Colonización y el decreto N° 2612/2023 en la Dirección Estado Dominial y Catastral del Instituto de Colonización, en el marco del decreto N° 1441/1993, hasta su promoción dispuesta por decreto N° 3655/2023 que fue dejado sin efecto por decreto N° 235/2024 y que su carrera administrativa, fue acompañada de capacitación académica, obrante en su legajo personal.

Expresa que los agentes del Instituto de Colonización que fueron promovidos por decreto N° 3655/2023 se encontraban subrogando cargos, que, en su caso, subroga la dirección desde el año 2019 y que por ello, mediante actuación electrónica E14-2023-7878-Ae, la máxima autoridad del organismo dispuso la promoción de los directores, en el marco de los artículos 4° y 5° de la ley N° 293-A.

Que la actuación electrónica impulsada por la Jurisdicción 14, cuenta con intervención de las oficinas de control, por lo que no puede entenderse que contiene actos viciados de nulidad absoluta.

Manifiesta que el decreto N° 13/2023 cita leyes y artículos de la Constitución Nacional y Provincial, que no fueron debidamente observados por la Comisión Revisora –entiende-, al momento de elevar el dictamen 19/2024 al gobernador, provocando el dictado de un acto viciado de nulidades, arbitrariedades y discriminación; que no se advierte que se haya realizado un análisis particular de cada promoción dispuesta, con el correspondiente informe de las áreas técnicas de estructura correspondientes.

Continúa diciendo que deviene improcedente el marco de la ley N° 2768-F que adhiere a la ley Nacional N° 25.917 que dispone la creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal para una mayor transparencia a la gestión pública, que en el caso de su promoción, el gasto se encuentra previsto y que ello permitía al Estado la eliminación de su cargo base. Que los antecedentes se encuentran respaldados por años de subrogancia ininterrumpida, sin sumarios administrativos ni observaciones.

Entiende que tampoco se analizó la ley de creación del Ente, ni las facultades conferidas al titular de la jurisdicción. Que si bien, coincide en lo normado por decreto N° 1441/1999, se pretende asimilar las subrogancias con designaciones de personal de Gabinete. Que la transitoriedad o provisoriedad de la subrogancia no puede equipararse al empleado público de carrera administrativa con el personal de gabinete; porque desvirtuaría el fin de la norma y que los legajos y antecedentes de los agentes de la Jurisdicción 14 no fueron tenidos en cuenta, como así tampoco el legajo personal ni el informe requerido y evacuado por la Dirección de RRHH jurisdiccional, mediante E2-2024-569-Ae.

Que las designaciones tuvieron las intervenciones que la norma establece, y que la E14-2023-7878-Ae hasta el 28/12/2023 que fue devuelta a la jurisdicción, estuvo bajo la órbita de la Secretaria General de la Gobernación; que el artículo 7° de la ley N° 292-A, no resulta aplicable a las designaciones o promociones de directores, mucho menos de entes autárquicos, para los cuales se dictó legislación especial ley N° 293-A y al no tener acceso o vista del dictamen N° 19/2024 de la Comisión Revisora, desconoce cómo sus integrantes, pueden atribuir mala fe a los agentes de la jurisdicción 14.

Señala que la subrogancia importa la afectación de dos cargos dentro de la estructura de la Jurisdicción 14, motivo por el cual al promocionar o titularizar a los agentes, se produce la liberación y disponibilidad del cargo base del agente. Esta disponibilidad queda sujeta al marco legal de la ley de

Administración Financiera 192-A, y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de cubrirla con el llamado a concurso de la ley N° 1873-A; o bien eliminarla. Que no obstante, la suspensión del acto dispuesto por decreto N° 235, no modificó lo percibido en concepto de remuneración.

Refiere que no resulta aplicable lo manifestado en cuanto a que la designación de directores es una "facultad" del poder ejecutivo a propuesta de los organismos autárquicos dado que el decreto N° 3655/2023 no prevé ninguna excepción a la ley; que por decreto N° 235, se pretende modificar la norma, estableciendo pautas o exigiendo concursos, provocando una situación de clara discriminación y arbitrariedad y que esas facultades del titular del ente autárquico, fueron ejercidas mediante nota con proyecto de decreto agregado en E14-2023- 7878-Ae; y si el Poder Ejecutivo dispuso la unificación del instrumento (de diferentes jurisdicciones y situaciones de revista) en un mismo instrumento, ello no resulta imputable a los agentes de la jurisdicción 14.

Arguye que el decreto N° 3655/2023 dispone promociones o titularizaciones de agentes que subrogan por instrumento anterior a la fecha establecida en el decreto N° 13/2023 en cargos de directores de la jurisdicción 14, que por ende resulta ser un acto válido y dictado por autoridad competente durante la vigencia de su mandato constitucional.

Que el hecho de no haber percibido su remuneración durante el periodo 12/23, se debe a las fechas de cierre y carga de novedades al Sistema; que el sueldo de diciembre/2023 que debió cargarse en el sistema PON antes del 15/20 de diciembre, fue suspendido por imperio u orden del decreto 13/2023.

Que resulta arbitraria la conclusión del señor Fiscal de Estado en su dictamen N° 35/24, que no puede desconocer la publicación y notificación del acto y que, omite lo dispuesto en el artículo 126° de la ley N° 179-A.

Manifiesta que el Estado debe garantizar la carrera administrativa del empleado público y la no discriminación, conforme normas de supremacía constitucional y cita normas de la Declaración Universal del Trabajo.

Asimismo dice que atento el plazo previsto en el art. 91° de la ley 179-A, se ve en la obligación de interponer el presente recurso, sin contar con la vista solicitada por E2-2024-4692-Ae, donde se encontraría el dictamen N° 19/24 de la Comisión Revisora y demás actuaciones citadas en el Visto del decreto N° 235/2024. Que la jurisprudencia citada en los Considerandos del decreto recurrido no resulta aplicable al caso y que en varias oportunidades solicitaron el llamamiento de Concurso para cubrir los cargos correspondientes, quedando expuesta la buena fe de los agentes del Instituto de Colonización.

Continúa fundando su recurso a lo que me remito "brevitatis causa". Ofrece pruebas. Concluye con petitorio de estilo.

Posteriormente, y con motivo de la vista de las actuaciones obrante en e-parte 48, en la e-parte 50 obra contestación de vista de las actuaciones del recurrente.

En la misma, el sr. Brondi, básicamente expresa que las e-partes 16 a 49 que se encuentran agregadas, no se encuentran ajustada a su caso oportunamente planteado ni se encuentra citado en las mismas, solicitando sean separadas del recurso interpuesto o bien que una depuración de las documentales por corresponder a otro Ministerios y/o Jurisdicciones.

Que por su parte fueron agregados todos y cada uno de sus antecedentes, requeridos por esta Asesoría General de Gobierno.

Que deja aclarado que desde el sistema PON no se ha liquidado a ningún agente descripto en la planilla anexa del decreto recurrido de esa Jurisdicción como titulares de los cargos subrogados, ni se ha modificado la estructura de cargo, como consecuencia de la suspensión ordenada por decreto N° 13/2023, sin efectivizar las cargas en el sistema PON por no haber tomado intervención, tal cual lo informa la directora de Control y Liquidación de Haberes del área y que por ello, de ninguna manera se puede sostener que la revocatoria del acto administrativo resulta procedentes por no haber tenido principio de ejecución.

Que el decreto N° 3655/2023, en cuanto a su titularización, se encuadra en las prescripciones de la ley N° 293-A-como tantos otros decretos de la misma naturaleza que han sido legítimos y publicados en la página oficial https://consultatramites.chaco.gob.ar/instrumentos-legales -dice-, y cita varios, exigiendo igualdad de trato. Que prueba su idoneidad, mérito y antigüedad sus 10 años subrogados como director en la Dirección de Recursos Humanos. También hace alusión al principio de la buena fe, que la MALA FE NO PUEDE SER PRESUMIDA, sino probada por quien la alega. Concluye con petitorio de estilo.

II. Ahora bien, delimitado el marco recursivo a continuación se procederá a analizar cada uno de los supuestos agravios invocados.

El decreto N° 235/2024 en su art. 1° deja sin efecto el decreto Nº 3655/23, en los términos de los artículos 127° y 128° de la ley Nº 179-A-Código de Procedimientos Administrativos-, en un todo de acuerdo con el dictamen Nº 19/24 de la Comisión Revisora.

Por su parte, el decreto N° 3655/2023 de fecha 07/12/2023, en su art. 1°, reza: *"Promuévase, a partir de la fecha del presente decreto, a los agentes detallados en Planilla Anexa, que forma parte integrante del presente Decreto, en el cargo de Director -Categoría 3 -Personal Administrativo y Técnico*

Apartado b) -Grupo 1 CEIC 1041 00, Director- Categoría 3- Personal Administrativo y Técnico Apartado a)- Grupo 2- CEIC que y Director General- Categoría 3- Personal Administrativo y Técnico Apartado a)- Grupo 1 CEIC que corresponda, en las oficinas allí consignadas, de conformidad con los fundamentos del presente"; y en su art. *2°: "Déjanse sin efecto, a partir de la fecha del presente Decreto, en los casos que correspondan, las designaciones en forma provisoria y subrogante de los agentes promovidos por el presente instrumento, atento la medida establecida en el Artículo 1° y de acuerdo con los fundamentos expuestos en los Considerandos del presente".*

-En relación a los años de subrogancia que menciona, destacando que durante años solicitaron se abra concurso interno, lo que siempre se vio frustrado. Promoción y titularización que luego llego por el decreto de promoción N° 3655/2023 que fue dejado sin efecto por decreto N° 235/24, justificando así su designación automática sin concurso.

Como primera medida corresponde señalar que el acto que se pretende validar y que fuera nulificado por el decreto hoy cuestionado, fue dictado por el anterior mandatario provincial, reconociendo *"Promociones y titularizaciones"* de cargos correspondientes a Jefaturas de Departamentos y Direcciones, en distintas Jurisdicciones, -en el caso del Instituto de Colonización- entre los que se encuentra el recurrente.

Ahora bien, adviértase que el acto administrativo atacado (decreto N° 235/2024), no sólo cuenta con un detallado desarrollo de los antecedentes fácticos sino también de los fundamentos técnicos jurídicos -existencia de vicios graves en sus elementos esenciales, que determinaron su revocación en sede administrativa, opinión que desde ya se anticipa.

Ello se evidencia del cotejo de las Actuaciones electrónicas incorporadas, donde se evidencia el **tracto abreviado que se impuso al decreto que se pretende restablecer,** toda vez que, según seguimiento de Ruta del SGT, tuvo inicio en fecha 04/12/2023 y finalizó con el dictado del decreto el día 07/12/2023, es decir último día de la gestión saliente, obviamente ninguna referencia a esta situación realiza el agente recurrente, pese a tener pleno conocimiento de la irregularidad que ello representa en el procedimiento legalmente establecido al efecto, **máxime teniendo en consideración que ella misma en el punto referido a "Mis Antecedentes" de su presentación reconoce y admite que con anterioridad al dictado del decreto N° 3655/2023** ***"....Que, durante todos estos años, hemos solicitado en no menos de tres oportunidades se abra concurso interno para cubrir los cargos de estructura, amén de tomar conocimiento de que en otras jurisdicciones se promocionaban sin más trámite en el marco de la Ley 293-A, siempre iniciamos nuestra petición con apertura de concurso, lo que siempre***

se vio frustrado por motivos que desconozco, informalmente "no era el momento".

Sin perjuicio de que la claridad del texto reproducido precedentemente nos eximiría de mayores consideraciones, vale dejar en claro que el propio recurrente en el mismo **no solo reconoce y admite que el procedimiento legal para adquirir la titularidad de un cargo de la estructura, es el LLAMADO A CONCURSO, situación que importa su conocimiento del vicio del acto dejado sin efecto y la consecuente factibilidad por parte de la administración de proceder a SU REVOCACION en dicha sede por conocimiento del vicio.**

Por otra parte, y sin perjuicio que más adelante haré expresa referencia a este punto concreto, lo descripto evidencia el CONOCIMIENTO DEL VICIO que el recurrente tuvo del acto dejado sin efecto y consecuentemente la viabilidad por irregular de su revocación en sede administrativa.

En ese contexto, las titularizaciones que se invoca, refieren a una situación específica que implica -violación al procedimiento de selección, evaluación y promoción por concurso que garantice transparencia, participación, igualdad de oportunidades e idoneidad para el desempeño de los cargos a ocupar, nuestros tribunales son contestes en garantizar su cumplimiento, concurso público - como paso previo a cualquier designación en la administración pública.

Este principio inquebrantable, encuentra su fundamento, además en el art. 16° de la Constitución Nacional que dispone que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición de que la idoneidad, principio replicado en el art. 23.1 inc. c) de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho de todos los ciudadanos "de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país", equivalente asimismo con el art 21° inc. 2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 25° inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (todos con jerarquía constitucional conforme lo previsto por el art. 75° inc. 22 de la Constitución Nacional).

De esta manera, la ley provincial N° 292-A establece como derecho de los agentes de planta permanente a la carrera administrativa, disponiendo en su art. 23° inc. 4) *"...que se entiende como el progreso del agente en lo concerniente a ascenso, mejora de función y remuneración dentro de lo determinado por las pautas que fije el escalafón..."*.

El mencionado cuerpo legal dispone en el segundo párrafo del art. 7°: *"...En caso de que deban cubrirse cargos de nivel superior se realizará previamente concurso interno de antecedentes y/u oposición para la*

promoción de los agentes que ya prestan servicios en la administración. Solo si este concurso se declarara desierto podrá llamarse a concurso abierto".

Ello es así en virtud a que en materia administrativa, rige el principio de legalidad y juridicidad, donde la administración debe obrar en el marco de lo legalmente establecido, constituyendo ello – como en el presente caso y régimen del concurso- facultades expresamente regladas, que el Estado y mucho menos los funcionarios pueden desconocer.

La violación a la ley (como lo ocurrido por el decreto anulado) ha resultado la premisa determinante para la decisión nulificante, adoptada por la máxima autoridad administrativa provincial entrante, fundada no solo en el procedimiento express impreso – omitiendo todos los pasos procesales respectivos-, *sino especialmente en la deliberada aplicación al caso de un procedimiento de excepción a la constitución Provincial; encontrándose involucrados cargos jerárquicos de la estructura orgánica*, generando vicios contundentes tanto en la causa (antecedentes de hecho y derechos invocados) como en el objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Todo lo cual ha sido detallado y fundado en el instrumento recurrido, al cual nos remitimos por razones de brevedad. Lo que desvanece cualquier agravio plasmado por el recurrente.

Pues lo exigido por la norma (a pesar de los antecedentes laborales que mencionara y que la recurrente acompaña como prueba) no se cumplió, es decir no existió concurso para las titularizaciones, resultando esta y no otra la vía y procedimiento reglado por la normativa aplicable.

-En relación al planteo de que la actuación impulsada por la Jurisdicción 14 cuenta con la intervención de todas las áreas.

Ello constituye una afirmación que falta a la verdad y enerva aún más el pseudo planteo formulado por el recurrente, prueba de ello lo han dado la observación de los antecedentes e informes obrante en las e-partes 40, 41, 42 y 43, como así también, en los informes requeridos por la Comisión, agregados y debidamente desarrolladas en el decreto impugnado. Motivando con constancias concretas y objetivas las nulidades absolutas, advertidas en el instrumento nulificado.

-En relación al planteo de que debe estarse a la naturaleza jurídica del Instituto de Colonización, que forma parte de la administración descentralizada.

Sobre este agravio corresponde dejar en claro que, conforme Título III de la ley N° 471-P que crea el Instituto de Colonización, reconoce su carácter de entidad autárquica, pero expresamente determina que *"...mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Producción siendo continuador de su homónimo creado por ley 2107, y haciéndose cargo de los*

derechos, acciones y obligaciones de éste, será el organismo de aplicación de la presente Ley".

Vale decir que el mismo forma parte de la administración descentralizada (en su figura de autárquico), no obstante lo cual, el régimen para su personal es el mismo de la administración pública central y tratándose el caso de un cargo jerárquico -Director-resulta de aplicación lo expresamente prescripto en los artículos 4° y 5° de la ley N° 293-A.

El art. 4° textualmente reza: *"Los organismos autárquicos propondrán la designación de director al Poder Ejecutivo y este la efectuará por decreto refrendado por el ministro a través del cual mantenga sus relaciones con el poder ejecutivo. Esta designación podrá hacerse por resolución ministerial cuando el ministro respectivo se hallare debidamente autorizado para ello. Iguales instrumentos podrán disponer la baja del director"*; y el art. 5º dice: *"Para la designación del director deberán evaluarse los antecedentes y condiciones de los agentes que presten servicios dentro de la administración pública. El Ministerio o Secretaría de Estado podrá llamar a concurso interno para cubrir el cargo. El ámbito de concurso será fijado en el respectivo llamado*".

De la lectura de los textos de la normativa reproducidos en el párrafo precedente, surge evidente que la facultad de las autoridades de los entes autárquicos se limita a la *de proponer designaciones al Poder Ejecutivo quien en definitiva de aceptar dictará el instrumento legal correspondiente debiendo contar con el refrende del ministro competente.* También surge evidente – art. 5°- que dicha designación podrá realizarse por concurso interno.

Esta norma data del mes de diciembre del año 1976.

Ahora bien, con fecha 14 de marzo de 2005, el entonces Gobernador de la Provincia, dictó el decreto N° 385 -actualmente vigente- por el cual en su artículo primero faculta a los ministros y autoridades superiores con dependencia directa del Poder Ejecutivo, **incluidos los organismos descentralizados,** a hacer uso por Resolución y en las respectivas áreas jurisdicciones a su cargo, de las siguientes atribuciones:....**inc e).-Llamado a concurso interno para la selección, promoción y designación del personal** y para el supuesto de subrogancias el inc. f) sujeta el procedimiento a lo establecido en el decreto N° 1441/1993 cuyo texto mantiene vigencia.

Cabe dejar en claro que la normativa citada y reproducida en su parte pertinente debe ser analizada en forma conjunta con lo establecido por el decreto N° 1618/2010, motivo por el cual no resulta viable el hecho de que la designación de cargo de Director, pueda realizarse por resolución y mucho menos obviándose el procedimiento de llamado a concurso.

El decreto N° 1618/2010 que aprueba el Reglamento para el Procedimiento de Concurso para cubrir cargos jerárquicos de Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento, con estructura orgánica y presupuesto aprobado de los organismos de la Administración Central del Poder Ejecutivo, incluye a los entes **Descentralizados y Autárquicos y surgió con la finalidad de reglamentar los llamados a concurso en el ámbito de toda la administración pública,** resultando dicha metodología no sólo la idónea, sino fundamentalmente ajustada a la Carta Magna Provincial.

Consecuentemente, siendo el Instituto de Colonización un ente descentralizado y por lo tanto sujeto a las previsiones legales citadas, motivo por el cual el agravia esgrimido con referencia a la cuestión resulta inatendible.

- Respecto a la transitoriedad y subrogancia, donde el recurrente formaliza una interpretación o equiparación a personal de gabinete, y a su vez la pretendida no aplicación del fallo Bottini corresponde reseñar lo siguiente.

Al referenciar el recurrente que la decisión adoptada por la máxima autoridad del Ejecutivo Provincial, afecta su carrera administrativa y en una expresión inentendible y que no se advierte del texto del decreto recurrido, indica que *"...tampoco puede invocarse que la transitoriedad o provisionalidad de la subrogancia equipare al empleado público de carrera administrativa con el personal de gabinete, expresión que no sólo no existe, sino que además contravendría con los argumentos legales expuestos precisamente como sustento de la decisión adoptada..."*.

Insistimos en nociones básicas del derecho administrativo y de la carrera administrativa en el marco del empleo público, **Subrogancia:** Conforme se hizo expresa referencia en el Decreto cuestionado sobre la figura administrativa de la subrogancia, específicamente a su carácter transitorio y la **inexistencia de un verdadero derecho subjetivo,** es nutrida la jurisprudencia de nuestros tribunales en tal sentido, no sólo en antecedente "Bottini", cuya inaplicabilidad al caso sostiene erróneamente el recurrente, sino que constituye una realidad irrebatible y legalmente irrefutable **su carácter transitorio, sujeta a la apreciación de los órganos competentes.**

Sobre el tema, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa de la Provincia del Chaco tiene dicho: *"...Ahora bien, como reiteradamente venimos sosteniendo , partiendo de la base de que la creación o el mantenimiento de las vacantes y la oportunidad de su cobertura dependen, en los supuesto que ahora se contemplan, de circunstancias en cierto modo aleatorias y sujetas a la apreciación de los órganos competentes,* ***no puede sostenerse que en***

verdad, y fuera de los supuestos de promoción automática, exista un derecho subjetivo al ascenso y menos aún que el mismo se dé con carácter general, ya que la selección necesaria y la estructura piramidal de la Administración Pública se oponen a ello *(Baro Daisy L La relación de empleo público. Astrea. Buenos aires, ps 35/37 ob. Cit. En revista de derecho Público, Empleo Público – 1 2012-1 Pág. 494). El derecho del agente no constituye un derecho subjetivo al ascenso, y así lo ha entendido la procuración del tesoro de la Nación al sostener que la pretensión de los interesados de ser encasillados en categorías superiores no pasa de ser una mera aspiración, sin que resulte un derecho que la Administración se encuentre obligada a satisfacer por no existir norma legal que así lo disponga. En esta materia el poder administrador tiene facultades discrecionales (PTN, dictámenes 233:200,261:72; 263:32).* ***Bajo esta línea de razonamiento, el desempeño prolongado de un cargo en carácter de subrogante no genera más que una expectativa de ascenso que de ningún modo puede traducirse en el derecho a la designación definitiva, obviando el procedimiento del concurso de oposición y antecedentes que resulta el medio por excelencia para garantizar la cobertura de cargos con personal idóneo. Bajo estas circunstancias, se rechaza la pretensión analizada..."*** ("CACERES ANA GRISELDA c/PROVINCIA DEL CHACO s/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA", Expte. N° 10872/19-1-A"), las negritas y subrayado me pertenecen.

El desempeño en carácter de subrogante en un cargo no constituye fundamento suficiente que justifique exceptuar el procedimiento de selección, provocando un trato discriminatorio respecto del resto de agentes que pudieran considerarse idóneos y con derecho a participar del citado proceso selectivo.

Que la designación como subrogante en un cargo superior se enmarca en el ejercicio discrecional de potestades o poderes en cabeza de la Administración Pública, para asegurar la prestación efectiva de un servicio o empleo público de manera transitoria.

El mero transcurso del tiempo en el ejercicio de un cargo transitorio no otorga un derecho adquirido a ser designado de manera definitiva, más solamente una expectativa, por cuanto la designación es precaria y realizada de manera discrecional.

Que, tratándose de actos precarios, los mismos son esencialmente revocables, toda vez que la débil naturaleza del derecho emergente no permite consolidar una situación jurídica estable (v. Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, T I, Ed. Astrea, 1993, pág. 390 y ss.; Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T II, Ed. Abeledo Perrot. 2000, pág. 291 y 297).

Que la designación como subrogantes de manera transitoria y precaria no puede ser desconocida por los agentes, no sólo por ser de planta permanente de la administración, sino también porque ello surge de manera expresa de los decretos de designación.

En definitiva, de las constancias obrantes en autos surge una realidad objetivamente distinta y hasta contrapuesta con lo planteado por el recurrente; el dictado del decreto cuestionado por el sr. Brondi, encuentra su fundamento en el análisis pormenorizado y detallado que ha llevado a cabo la Comisión Revisora, en los términos del decreto N° 13/2023 y actuaciones electrónicas generadas en consecuencia.

En efecto, para arribar a la conclusión propiciada en el Dictamen N° 19/2024, la Comisión Revisora contó con todos los antecedentes e informes de las dependencias competentes necesarios a tal fin.

Precisamente, dichos antecedentes analizados en función de la normativa aplicable, constituyeron basamento fáctico y jurídico que permitieron advertir los vicios graves que ostentaba el decreto N° 3655/23 y que, en definitiva, motivaron su nulidad en los términos del artículo 127° y ss. de la ley N° 179-A, Código de Procedimientos Administrativos.

Por consiguiente, *podemos concluir con relación a las apreciaciones sobre el fondo de la cuestión,* ***que el recurrente no fue designada conforme a las pautas previstas por la normativa vigente****, toda vez que su ascenso debió efectuarse siguiendo el procedimiento debido para ello, realizándose la designación en cuestión sin el respaldo de un procedimiento de selección.*

La conducta, las pruebas y los argumentos desarrollados por el recurrente prioriza un interés personal y particular por sobre el general, desconociendo el principio de la legalidad- juridicidad que rige en materia administrativa, pretendiendo defender una posición basada en una ilegalidad, contrariando la normativa aplicable, en manifiesto acto discriminatorio y violatorio de la garantía constitucional contemplada en el artículo 16° de la Constitución Nacional (igualdad ante la ley) y reproducida en los artículos 69° y 70° de la Constitución Provincial, vicio grave que autoriza a la revocación en sede administrativa (conocimiento del vicio).

A su vez, y con criterio compartido, el decreto nulificado no generó derechos subjetivos que estén en cumplimiento, haciendo pasible su revocación en sede administrativa con vista al fiscal, en idéntica interpretación al fallo Bottini, resultando la vía y el procedimiento para su revocación incuestionable.

La existencia de mala fe radicó en este aspecto en que el personal, de tantos años en la administración pública, no puede invocar el

desconocimiento de las normas y mucho menos del recaudo legal del concurso para acceder a titularizaciones, no obstante ellos siguen insistiendo en hacer reveer una situación que ellos mismos reconocen , constituir algo extraño a la misma y en insistir que se consolide una situación que quebranta no solo la norma que lo regula (al concurso) sino que también a todo el ordenamiento constitucional y convencional citado; y en este punto me remito a lo expresado más arriba en relación al reconocimiento expreso que el recurrente efectuó en tal sentido en su pretensión recursiva y a las que me remito a fin de no incurrir en reiteraciones inoficiosas.

En concreto, la mera declaración dictada por el órgano de manera ilegal con el objeto de reconocer un derecho, no implica que el acto sea plenamente válido y en consecuencia irrevocable, más aún cuando como en el supuesto que nos ocupa, no hubo efectivo cumplimiento o goce del derecho (criterio sostenido en caso análogo de transferencia y promoción directa sin respetarse el procedimiento reglado en la causa "BOTTINI ARIEL ALEJANDRO C/ INSTITUTO DE CULTURA DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ ACCION DE AMPARO" Expte. N° 1849/2020-1-C, en sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala Cuarta).

Así, las titularizaciones ordenadas en el acto administrativo en análisis no fueron registradas en Sistema PON, (e-partes 40, 41, 42 y 43) es decir que los agentes involucrados nunca percibieron como titulares y mucho menos se les reconoció como titulares. Continuaron percibiendo sus haberes con subrogancia, sin manifestar cuestionamiento u observación alguna en su oportunidad, sin variar ni generar derechos distintos a los anteriores al decreto, en crisis.

Respecto al material probatorio aportado por el recurrente, el mismo ha sido considerado y evaluado a los fines de resolver esta presentación, mas no resultan suficientes como para modificar la convicción que sobre el caso concreto tuvo la Comisión Revisora y que motivó el dictado del decreto recurrido.

Por el contrario, la suscripta entiende que existen elementos fácticos y jurídicos que avalan la legalidad y legitimidad del decreto atacado.

La carrera administrativa debe contemplar la aplicación de criterios que incorporen principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la carrera administrativa, basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia y rendimiento laboral y de exigencias de capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, resultando necesario la

implementación y acatamiento de los proceso correctos de selección, en miras a promover el respeto, entre otras cosas a la ética pública, la igualdad de oportunidades y la carrera administrativa de todos los agentes públicos.

En este orden de pensamiento, si se atribuye estabilidad y/o promoción a quien no han sido escogido con los requisitos y medios de selección previstos por los cánones vigentes, no solo se estaría trastocando el régimen previsto por la normativa local, sino que se vulnera el derecho a la carrera administrativa, derecho otorgado por los mandatos de la ley de procedimiento provincial a cada agente del sector público.

Sostener la conclusión contraria, es decir, la imposibilidad de dejar sin efecto la designación en cuestión, vulneraría el régimen legal de la función pública, toda vez que el sistema de concursos resulta el principio general en lo que concierne a ingreso y promoción en materia de empleo público que fluye del artículo 16° de la Constitución Nacional.

Sobre el tema nuestro máximo Tribunal Provincial ha dicho: *"...La doctrina ha señalado que las pautas que se deben cumplir para acceder a los puestos públicos debían ser "de tal naturaleza que excluyan cualquier privilegio, y que puedan ser satisfechas por todos los habitantes de la Nación por su esfuerzo propio o por el transcurso de los años (Montes de Oca M., Lecciones de derecho constitucional" Lib. "La Buenos Aires" Buenos Aires, 1902, t.I, p. 305). Es que la especificación de la idoneidad, aparte de inspirarse en el bien común, "quedará a salvo en cuanto no importe crear exclusiones y privilegios, ni distinciones arbitrarias que afecten el plano de igualdad en que se pretende colocar a todos los habitantes"* (Casiello, Juan P. "Derecho Constitucional", ed. Perrot, Buenos Aires, 1954, p. 318).

De acuerdo con lo expuesto, el decreto N° 235/2024, hoy cuestionado, es coherente con las normas constitucionales y convencionales citadas, en particular con los Tratados sobre la Lucha contra la Corrupción que incluyen preceptos sobre formas de selección y ascensos de los empleados públicos sobre la base del mérito y capacidad. Por otro lado, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1997 (aprobada por ley nacional 24.759), determina que *los Estados Partes deben "crear, mantener y fortalecer (...) sistemas para la contratación de funcionarios públicos (...) que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas (art. III, inc. 5).* Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 (aprobada por ley nacional 26.097) establece que *cada Estado Parte adoptará sistemas de contratación y promoción "basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como mérito, la equidad y la aptitud" (Cfr. Sagues, Néstor, "Sobre la reglamentación del principio constitucional de idoneidad, La Ley 1980-C-1216 TR La Ley AR/DOC/15146/2001)..." STJ, Sala Contencioso*

Administrativa autos caratulados: "RODRIGUEZ LEONARDO MARTIN C/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" Expte. N° 10602/19-SCA.

Sin lugar a dudas, en el decreto dejado sin efecto, se advierten nulidades en todos los elementos del acto, lo que lo tornan nulo de nulidad absoluta en atención a la ausencia total de motivación, en virtud a la falta de invocación de hechos o antecedentes concretos, los que no constituyen fundamento alguno para exceptuar régimen legal o la aplicación de un procedimiento de selección en el que prime la idoneidad.

Por lo que no quedan dudas que el decreto recurrido N° 235/2024, no solo cumple con los elementos esenciales para tornarlo valido y eficaz, sino que a su vez fue dictado en pleno ejercicio de potestades propias de la misma administración, en función a lo acreditado y regulado a su vez por el art. 127° y ss de la ley 179-A.

Es de destacar, que la administración ha actuado en el marco de la normativa aplicable y por sobre todo en el ejercicio de un deber de " ... proveer a la gestión directa e inmediata del interés público comprometido en la vigencia de la juridicidad"(PTN Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto. Expte. N°023/523/00, publicado en E.D., suplemento de derecho administrativo del 31/05/01).

De todo lo expuesto resulta claro e inequívoco que la agente Brondi, dada su antigüedad como agente de planta permanente de la administración pública, conocía la normativa que rige la función pública, no pudiendo invocar el desconocimiento de las irregularidades, vicios e incumplimientos de los procedimientos de traslados y promociones de las que estaba siendo parte.

Con relación a lo antes mencionado, la ley N° 179-A dispone en su artículo 127°: *"Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable por el procedimiento judicial establecido en el artículo 128, salvo que el vicio hubiere sido conocido por el interesado, en cuyo caso se podrá proceder a su anulación de oficio en sede administrativa, en la forma en que se indica en el artículo siguiente".*

Que la primera parte del artículo mencionado establece la inmutabilidad del acto regular en sede administrativa, salvo "...si el interesado hubiere conocido el vicio...", es decir que el conocimiento de la anomalía por parte del administrado o interesado faculta a la administración a revocar el acto de oficio en sede administrativa.

En ese sentido la Doctrina nos ilustra señalando que *"...es suficiente para habilitar el accionar anulatorio oficiosos el mero y simple conocimiento del vicio por el administrado- o la exigencia razonable de ese conocimiento- sin que sea menester por tanto, que aquel haya sido causado por el administrado."* (Comadira Julio Rodolfo, El Acto Administrativo -Configuración del conocimiento del vicio- Ed. La Ley pag. 215, ed.2011).

Que al respecto, resulta oportuno destacar que no puede alegarse buena fe por parte del agente recurrente por un acto irregular, por cuanto reviste en la planta permanente de la Administración Pública, sumado a los antecedentes de hechos expuestos, la ausencia de concurso interno de oposición y antecedentes, hacen que no pueda desconocer en base a la magnitud de los vicios expuestos que surgen evidentes y ostensibles, que está accediendo de manera irregular a un cargo superior, y con ello afectando al subrogante en ejercicio, y es lógico que la Administración pueda anular la designación por conocimiento del vicio. La jurisprudencia de la Corte Suprema a partir del caso "Almagro" (Fallos: 321:169, 1998) lo habilita.

La Procuración del Tesoro de la Nación y la doctrina, han esbozado su análisis alrededor del instituto del conocimiento del vicio, teniendo siempre en miras su compatibilización con los valores y principios del Estado constitucional social de derecho vigente en la República. Que, a su vez, también hizo eco, por un lado, del grado de evidencia del vicio en cuestión, al dictaminar que el conocimiento se presume cuando el vicio sea manifiesto, al contrastar el acto viciado con el orden jurídico (Dictámenes 249:547 y 249:324).

-**Intervención del Fiscal de Estado:** La Comisión Revisora, a los fines de garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los pasos procesales exigidos por el ordenamiento jurídico, dada la situación particular del caso – agentes notificados del acto nulificado – solicitó la intervención legal del Fiscal de Estado en su carácter de órgano constitucional con atribuciones de control de legalidad de los actos del Estado-, quien en la oportunidad, en función a los antecedentes fácticos y jurídicos soportes del proyecto de decreto (dictámen de la Comisión Revisora), se expidió - dictámen N° 35/24 – ***"...en los términos de que el Decreto 3655/23 colisiona con las normas legales vigentes y aplicables al caso, resultando pasible de los vicios que se le endilgan, convirtiéndolo de esta forma en un acto administrativo irregular; nulo de nulidad absoluta, que debe ser revocado en sede administrativa; todo ello en armonía al contenido normativo expuesto por los Artículos 127 y 128 de la Ley N° 179-A"***

La contundencia del dictamen emitido por la mencionada autoridad constitucional, nos exime de mayores consideraciones.

Ergo, del análisis de todos los fundamentos brindados por el recurrente, de los antecedentes ponderados y de las pruebas corroboradas, se advierte que la queja formalizada, *lejos de revestir carácter de verdaderos agravios, entendidos como crítica razonada y fundada de la decisión cuestionada, simplemente constituyen meras manifestaciones de disconformidad o desacuerdo, pero de manera alguna alcanzan la solvencia jurídica necesaria para ser considerados como tales.*

En este punto, debemos recordar que es criterio reiteradamente sostenido por *La Corte Suprema quien dicho, referenciando a agravios y/o planteos recursivos "... que no bastan en consecuencia escuetos argumentos que no constituyen más que una mera discrepancia con el criterio sostenido en el fallo recurrido y que distan de contener una crítica concreta y razonada de los argumentos que sostienen a aquél" ("Fallos"323:2131).- De la lectura del libelo impugnaticio se advierte que apelante se abstrae de las constancias de autos, limitándose a emitir meras apreciaciones personales, sin rebatir eficazmente los fundamentos de la resolución apelada.*

III. Conclusión: Como corolario de lo expuesto, y teniendo en cuenta el marco de competencia del Poder Ejecutivo Provincial para entender en el planteamiento recursivo, esta Asesoría General entiende que el acto administrativo atacado cumple con la totalidad de los recaudos técnicos jurídicos que lo tornan legítimo (legal y razonable) y ejecutorio.

Efectivamente, ha contado con adecuado sustento en los hechos que le sirven de causa y del derecho aplicable; no logrando – los argumentos esgrimidos por el recurrente- desvirtuar lo decidido en dicho acto y mucho menos enervar sus consecuencias jurídicas; resultando sus argumentaciones meras disconformidades sin solvencia jurídico legal suficiente para ser considerados como verdaderos agravios tal como se expuso en el numeral específico, razón por la cual corresponde rechazar el Recurso de Revocatoria incoado por el sr. Gonzalo Matías Brondi, DNI N° 31.229.955, contra el decreto N° 235/2024, manteniéndose la plena vigencia del mismo.

No obstante lo aquí opinado, deberá tenerse presente que el art. 13° de la ley N° 2108-A que enuncia: *"Los dictámenes, vistas, informes legales u opiniones jurídicas que emita la Asesoría General de Gobierno, no son vinculantes para la repartición u organismo requirente".*

Atentamente.

ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO;

14 MAYO 2024

MARÍA FERNANDA KNIAZ
ABOGADA
Asesoría General de Gobierno